

2016

ABERRI EGUNA

Declaración del Comité Nacional

Marzo del 2016



[objeto]

El Comité Nacional de ELA aprovecha la celebración del Aberri Eguna para analizar la coyuntura política y reafirmar el compromiso de la confederación con la soberanía de nuestro pueblo.

[europa]

Nuestra mirada sobre la coyuntura general no puede comenzar sino por el escenario de crisis humanitaria en que se encuentra Europa. Ante el drama de cientos de miles de personas que huyen de la guerra y solicitan asilo los mandatarios europeos han decidido actuar contra la legalidad internacional y los más mínimos principios humanitarios, negándoles cobijo y seguridad. Por esa razón, ELA se reafirma en las razones por las que rechazó en el año 2005 el Tratado Constitucional sometido a referéndum: rechazamos esta Europa de los mercados ajena a los derechos de las personas y de los pueblos. Por ello, urge un nuevo plan para Europa, basado en valores de integración y justicia social, y garante de los derechos humanos hoy, sobre todo, de las masas de refugiados que solicitan asilo.

[agenda estatal]

En el ámbito de estado, el reconocimiento de las naciones y su derecho a la autodeterminación ocupan un lugar más relevante en el debate político que en el pasado reciente. A ello están contribuyendo, sin duda, el proceso catalán y el hecho de que una referencia política de ámbito estatal haya concurrido a las elecciones generales defendiendo el derecho a decidir. A pesar de ello, ELA considera que nada de eso ha venido a modificar orientaciones de la agenda del estado: una agenda involutiva –en lo social y en el autogobierno–, represiva en materia de derechos humanos y garantías democráticas y obstinadamente contraria a la solución de los problemas que se arrastran como consecuencia de las violencias políticas sufridas durante décadas.

En concreto, la negativa del gobierno español a gestionar el desarme y la situación de los presos y presas –cinco años después del fin de la lucha armada– constituye una gran irresponsabilidad. Creemos que la acción del ejecutivo español busca desgastar el proceso soberanista impidiendo que se trabajen otras agendas. El estado utiliza a los presos y presas como rehenes para la consecución de sus objetivos políticos, lo que contraría los derechos humanos y los más elementales principios democráticos. Una vez más, ELA reclama el fin de la dispersión, la excarcelación de los presos y presas enfermos, y poner fin al cumplimiento íntegro de las penas, dentro de un proceso global de normalización de la política penitenciaria.

[inacción institucional]

En relación con el autogobierno, el gobierno del estado ha seguido aprovechando la crisis económica y su mayoría absoluta en el parlamento para erosionar nuestra ya limitada autonomía. Cuestiones clave para el desenvolvimiento económico y social como las relaciones laborales, la formación, la educación o los límites presupuestarios son impuestos en muchos casos con la connivencia explícita o implícita, cuando no el entusiasmo, de las instituciones vascas, especialmente cuando de satisfacer las reclamaciones del mundo económico y empresarial se trata.

ELA constata cómo la política económica antisocial es compartida entre nuestras instituciones y el estado. Sólo esto explica que en medio de semejantes ataques al autogobierno y la justicia social nuestros principales representantes políticos –empezando por el lehendakari Urkullu– sigan haciendo bandera de la bilateralidad. Se trata de una posición coherente con el apoyo del Gobierno Vasco a Confebask en su estrategia a favor de la centralización de la negociación colectiva como medio de devaluación salarial o la aplicación y desarrollo de la legislación estatal que recorta derechos, servicios básicos y condiciones laborales.

En el caso de Navarra, tras las elecciones de mayo, ELA acogió con satisfacción el fin de la nefasta era de los gobiernos UPN-PSN. Pero hemos recordado en muchas ocasiones lo que hoy por hoy es una evidencia: que el cambio de gobierno no supone per se ni el desmontaje de ese régimen, ni el cambio social. En este sentido, el Acuerdo programático suscrito por las fuerzas que sostienen el gobierno está lejos del cambio que durante años organizaciones sindicales y sociales de Navarra hemos reclamado en sucesivas movilizaciones. Y en lo que tiene que ver con el fin de los privilegios y las redes clientelares, consideramos injustificable que el actual gobierno siga otorgando, vía convenios, una más que generosa financiación al sindicalismo estatal y a la patronal.

El Gobierno Vasco apoya a Confebask en su estrategia a favor de la centralización de la negociación colectiva como medio de devaluación salarial.

ELA admite los pasos que se están dando en el reconocimiento de la diversidad política y cultural. Pero la normalización del euskera en Navarra sigue siendo una asignatura pendiente con la cual el acuerdo programático –y en lo referido a la “ley del vascuence”– no recoge un compromiso de cambio. Hemos echado de menos una mayor determinación por parte del Gobierno para sostener una posición coherente en relación con la OPE en el ámbito de la enseñanza. El Gobierno se ha dejado llevar por posiciones demagógicas y ha cedido ante los intereses ideológicos y corporativos de partidos, fuerzas económicas, sindicatos y medios afines al régimen. El ejecutivo Barkos debe revisar esa decisión, centrar el debate en principios democráticos (igualdad de oportunidades, lista única, discriminación positiva y, como mínimo, adecuar la oferta de la educación en euskara a la demanda en las escuelas infantiles...) y combatir la desigualdad y los privilegios. Se precisa, además, una estrategia efectiva y participativa en la que mediante la pedagogía, la promoción y la garantía de derechos se consiga neutralizar los efectos negativos de la política lingüística de UPN-PSN.

ELA valora el hecho de que el Gobierno de Navarra respete la interlocución con nuestro sindicato, actitud que nada tiene que ver con la del gobierno Urkullu, muy similar en esta cuestión al de los anteriores gobiernos de UPN. Pero, por lo demás, lamentamos constatar la semejanza con la CAPV en la orientación neoliberal de las políticas fiscales y presupuestarias, en el recorte del gasto y en la negativa a la negociación colectiva del sector público. Y nos parece grave, asimismo, la afirmación de la presidenta Uxue Barkos cuando dice que, en relación con Madrid, renuncia a la “confrontación”. El Estado tiene actualmente catorce leyes forales recurridas, y ante ello cabe preguntarse qué es lo que queda de un proyecto político cuando no hay confrontación democrática.

En la CAPV, ELA tiene que denunciar que el partido que sostiene al gobierno de Gasteiz y el propio lehendakari, con la connivencia de los principales media –incluido EITB–, hayan decidido difuminar cualquier sensación de conflicto político. Solo cuando los calendarios electorales lo exigen se apuntan horizontes temporales para la revisión del marco jurídico que tienen por objeto ir agotando legislaturas sin ninguna concreción. Baste como ejemplo lo sucedido en esta legislatura. Al mismo tiempo, referencias articuladas de cambio político – como la del nuevo estatuto aprobado por el Parlamento vasco hace más de 10 años– se abandonan siquiera como referencia mientras se constituyen nuevas comisiones parlamentarias con nuevos informes. El discurso y la acción en referencia a la soberanía y la defensa del autogobierno lejos de avanzar ha sufrido una considerable involución. ELA quiere subrayar además que esos debates en el Parlamento de Gasteiz se plantean excluyendo, entre otros,

El modelo de autogobierno en el que algunos creen está alejado de las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la sociedad.

al movimiento sindical. Se trata de un signo inequívoco del modelo de autogobierno en el que algunos creen, alejado de las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la sociedad; un modelo que niega al movimiento sindical que ejerza, para la defensa de sus intereses y expectativas, un papel de legítimo interlocutor.

Dormir el conflicto, y no permitir la participación de las organizaciones críticas con esta política, forman parte, a nuestro entender, de una única estrategia de acomodación al actual estado de cosas. Siendo esto así, no es de extrañar que las fuerzas políticas y organizaciones empresariales y grupos mediáticos más refractarios al cambio político disfruten de un período de singular placidez, y ello cuando en el parlamento de Gasteiz se acredita la más amplia mayoría abertzale alcanzada en la historia.

En relación con Iparralde, ELA sigue con especial interés y expectación el proceso de revisión institucional, administrativa y territorial y las fórmulas que se están barajando para un más justo reconocimiento de la realidad social, económica, política y cultural del País Vasco. Consideramos que el proceso, además, nos está proporcionando dos enseñanzas fundamentales.

El proceso está ayudando, en primer lugar, a verificar el compromiso de los agentes implicados. En un primer momento, adherirse a la reivindicación institucional ha resultado fácil, e incluso rentable electoralmente. Pero cuando se trata de pasar de las palabras a los hechos, aparece con mucha más claridad quién está realmente a favor de la Colectividad Territorial y quién no.

La segunda enseñanza del proceso tiene que ver con la participación de la sociedad civil, a través de la movilización de Batera y el trabajo del Consejo de Desarrollo del País Vasco. Movimientos sociales y culturales, sindicatos, organismos socio-profesionales, las organizaciones de agricultores y de protección del medio ambiente han contribuido sobremedida a enriquecer el contenido del debate y a definir las competencias políticas que serán necesarias en capítulos tan variados como el transporte, la política económica, la vivienda, el euskera, la cultura, el medio ambiente, la gestión de residuos o la ordenación del territorio y el urbanismo. La participación activa de los alcaldes y concejales –a través de los trabajos y

reuniones del Consejo de Electos– han hecho posible que este debate complejo de reforma haya logrado mejores concreciones y una mayor conexión con las necesidades cotidianas de la población y del territorio.

Por todo ello, ELA apuesta por que el estado reconozca finalmente las propuestas que sostengan las organizaciones articuladas en Batera, así como la apuesta del Consejo de electos.

El proceso para avanzar en nuestro reconocimiento nacional se enfrenta tres retos fundamentales: concitar una más amplia adhesión social, incrementar la movilización y superar nuestra incapacidad secular para los acuerdos políticos.

[los retos del soberanismo]

En este contexto general, ELA cree que el proceso para avanzar en nuestro reconocimiento nacional se enfrenta a tres retos fundamentales: concitar una más amplia adhesión social, incrementar la movilización y superar nuestra incapacidad secular para los acuerdos políticos.

Respecto al primer objetivo, ELA considera que el soberanismo no alcanzará a vincular mayorías más amplias mientras no se pongan las políticas públicas al servicio de las clases populares. Nuestro pueblo necesita saber y sentir que más autogobierno es igual a más justicia social; de lo contrario, difícilmente hará propio el objetivo de la plena soberanía. Por eso, resulta especialmente frustrante la orientación neoliberal y proempresarial de nuestros gobiernos y diputaciones. Estas instituciones gozan de importantes competencias y poderes que se están utilizando al servicio de una minoría privilegiada. La política de servicios públicos, de vivienda, la política fiscal o la más reciente negativa expresada por PNV, PP, PSE y UPyD a tomar en consideración la iniciativa legislativa presentada por ELA, no sólo contrarían una demanda sindical justa y ampliamente compartida, sino que además marcan el camino opuesto a un proceso soberanista con vocación social.

Respecto al segundo objetivo –el de movilizar a la sociedad– ELA quiere manifestar su preocupación por la que considera una deriva autoritaria y antidemocrática del nacionalismo institucional, mayoritario hoy en la CAPV. Las recientes y repetidas declaraciones del lehendakari Urkullu, expresando su "alarma" por el hecho de que los movimientos sociales influyan en el proceso catalán deberían haber provocado, a nuestro entender, una mayor reacción en nuestro país. No se

trata sólo de que en la actual coyuntura nacional e internacional sean los poderes económicos quienes dictan las reglas de la política. Considerar que la sociedad civil no puede discutir, deliberar y aspirar a influir y condicionar las decisiones que se toman en sede política pone en evidencia un pensamiento de dudosa raigambre democrática. El lehendakari debería recordar que la democracia no es un método de elección de las élites que gobiernan, sino un sistema en el que las instituciones y sus responsables deberían respetar la capacidad de la ciudadanía para actuar colectivamente desde principios éticos y aspiraciones sociales y políticas. Mucho nos tememos, por el contrario, que el actual Gobierno Vasco prefiera establecer con la sociedad civil relaciones clientelares, mientras se manifiesta repetidamente molesto con las organizaciones que no se pliegan al poder. En oposición a este pensar, ELA cree más necesaria que nunca la activación y articulación de las organizaciones sociales con el fin de condicionar y orientar las políticas públicas e impulsar la estrategia soberanista.

Respecto al tercer objetivo –el de acordar– hemos de lamentar lo que es una evidencia: que no hemos sabido aprovechar la oportunidad abierta tras el fin de la lucha armada para acordar unos mínimos en torno al derecho a decidir. Y es evidente que las divisiones en el mundo soberanista son la mayor baza de la agenda recentralizadora del estado. No se ha sabido aprovechar la oportunidad, en parte porque la confrontación esencial de estos años ha venido presidida por la lucha competitiva por la hegemonía y la disciplina partidaria, una competencia en la que el modelo de sociedad ha quedado relativizado. No pensamos que sea un problema de ritmos; sino de dirección. No hay objetivos compartidos, ni concreción de alianzas. Tampoco hoy disponemos de una lectura compartida sobre lo que ha supuesto el desarrollo estatutario en el pasado.

[el compromiso de ELA]

ELA quiere actualizar y renovar su compromiso con esos tres retos expresados: ganar mayores adhesiones sociales, incrementar la movilización y superar nuestra incapacidad para el acuerdo.

Seguir trabajando por ampliar la implantación del sindicalismo abertzale, muy en especial allí donde el soberanismo es minoría, constituye, creemos, nuestro principal aportación al proceso nacional. La práctica sindical honesta y combativa constituye nuestra más importante aportación para que la extensión del soberanismo pueda seguir produciéndose. Y ese trabajo será más eficaz si somos capaces de activar una mayoría sindical activa y sin hipotecas que trabaje por un modelo de sociedad más justo y solidario. El sindicalismo abertzale no ha sabido buscar su espacio para que las referencias alternativas que debe defender no queden diluidas en las prioridades institucionales que marcan los partidos. En nuestra opinión, el soberanismo o es social o no será.

ELA está convencida de que la mayoría sindical vasca, en ese proceso soberanista social, debería desempeñar un papel

Nuestro pueblo necesita saber y sentir que más autogobierno es igual a más justicia social; de lo contrario, difícilmente hará propio el objetivo de la plena soberanía.

Considerar, como hace el Lehendakari, que la sociedad civil no puede discutir, deliberar y aspirar a influir y condicionar las decisiones que se toman en sede política pone en evidencia un pensamiento de dudosa raigambre democrática.

determinante. Los problemas que lo impiden son objetivos, tanto en la negociación colectiva –en la que existen dos modelos de intervención sindical que restan en vez de sumar– como en el papel del sindicalismo en la activación social y política. En relación con la negociación colectiva, ELA siempre ha defendido que, allí donde sea posible y sin condicionarlo a otras cuestiones, se trabaje con todas las organizaciones de la mayoría sindical con el fin de impulsar la organización y la capacidad de lucha de las trabajadoras y trabajadores para la mejora de las condiciones laborales y de vida. En relación con la activación social, la presencia partidaria en las instituciones no debe significar que el sindicalismo pase a un segundo plano devaluando su interpelación crítica y constructiva. Máxime en una coyuntura en la que el entramado institucional construido en una Europa antidemocrática ha sido diseñado para hacer inapreciables los cambios de partidos en los gobiernos. Los partidos, en su prioridad institucional, aceptan los márgenes que impiden hacer política social. Consideramos que el sindicalismo debe desempeñar un papel de contrapoder y desarrollo de alternativas sea cual sea la hipótesis de gobernabilidad.

La práctica sindical honesta y combativa constituye nuestra más importante aportación para que la extensión del soberanismo pueda seguir produciéndose. El soberanismo o es social o no será.

La mayoría sindical vasca ha demostrado en otras ocasiones las enormes virtualidades de la alianza en términos de movilización y transformación, tanto en el ámbito estrictamente laboral, como en el social y el político. ELA apuesta por que pueda seguir siendo así también en el futuro. Solventar los problemas que nos impiden trabajar juntos y con plena eficacia para defender un proyecto alternativo, emancipador, de clase y soberanista, no depende del Estado, sino de nosotros y nosotras, y ello constituye una enorme responsa-

bilidad: crear un movimiento sindical y social con autonomía respecto de gobiernos, partidos y poderes económicos.

ELA va a seguir trabajando para que la clase trabajadora vasca sea un actor determinante en el proceso nacional mediante la defensa de un marco propio de relaciones laborales y protección social, un marco en que las aspiraciones de las clases populares vayan unidas a la lucha por la plena soberanía, y para que el sindicalismo abertzale sea un interlocutor eficaz y reconocido en ese debate.

Gora Euskal Herriko langileria!

Gora Euskal Herria askatuta!

Gora Euskal Herria sozialista!

